

INMIGRACIÓN Y NUEVA GESTIÓN MUNICIPAL

Feline Freier (*)



Con casi 1.5 millones, Perú es el segundo país de acogida para migrantes y refugiados venezolanos. Lima alberga más de un millón de ellos, lo cual representa el 10% de la población de la ciudad. Nuestra capital ya es la ciudad con la mayor población de migrantes venezolanos fuera de su país. Y si incluimos las urbes de Venezuela, Lima es la quinta ciudad con mayor población venezolana en el mundo. En el contexto de la prolongada crisis política interna, los migrantes y refugiados venezolanos se han convertido a menudo en chivos expiatorios a los cuales culpar de los problemas como el desempleo y el aumento de la inseguridad. Esto

último a pesar de que las denuncias contra ellos representan menos del 1.5% del total de las reportadas por la PNP y que, en proporción, reciben menos denuncias que las personas de las demás nacionalidades juntas (incluyendo la peruana).

No es extraño, entonces, que la gestión migratoria formara parte del debate entre candidatos municipales. Elizabeth León (Frente de la Esperanza) planteó un lamentable empadronamiento de ciudadanos venezolanos como medida preventiva del delito. De manera similar, Omar Chehade (Alianza para el Progreso) se mostró partidario de exigir a los centros comerciales que proporcionen datos de sus trabajadores extranjeros. Sorprendentemente, Rafael López Aliaga enfocó el tema de manera diferente en su plan de gobierno. Propuso implementar un "Plan integrador contra la delincuencia común" abierto a la participación de vecinos peruanos y extranjeros. Este

"Sorprendentemente, Rafael López Aliaga enfocó el tema de manera diferente en su plan de gobierno. Propuso implementar un 'Plan integrador contra la delincuencia común'..."

enfoque es positivo, porque, en lugar de culpabilizarlos, busca comprometer a los migrantes con la seguridad de la ciudad en la que ellos también desarrollan sus actividades cotidianas.

Es preciso recordar que, como candidato presidencial, López Aliaga propuso facilitar la regularización de los ciudadanos venezolanos con el fin de potenciar su contribución económica. Esto concuerda con la tendencia de los políticos de derecha latinoame-

ricanos, quienes suelen solidarizarse con los migrantes para demostrar su oposición a la dictadura venezolana. Si a todo ello sumamos el llamado a la unidad por parte de la presidenta Dina Boluarte, existe una oportunidad para promover políticas integradoras desde la Municipalidad de Lima. Por ello, recomendamos al alcalde electo y a la presidenta de la República entablar un diálogo en torno a este y otros temas útiles para la gestión de la ciudad. Son fundamentales la seguridad ciudadana, la formalización de los negocios, la regularización migratoria y la sensibilización de los funcionarios municipales en temas de movilidad humana. La colaboración entre los gobiernos municipal y nacional es clave para lograr una mejor ciudad para todos.

(*) Directora de la Cátedra IDRC, Universidad del Pacífico.

Coautores: Soledad Castillo Jara y Oscar Rosales Krumdieck.